

Bogotá, D. C., febrero de 2026.

Señor

**CESAR AUGUSTO APONTE GÓMEZ**

PLATAFORMAS LOGÍSTICAS ALIMENTARIAS S.A.S. – PLA S.A.S.

[c.aponte@me.com](mailto:c.aponte@me.com)

**Asunto:** Respuesta a Radicado No. 2025E1-065336 sobre Directrices de la Sabana.

Respetado señor Aponte Gómez:

Cordial saludo,

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible acusa recibo de la petición presentada en representación de Plataformas Logísticas Alimentarias S.A.S. – PLA S.A.S., relacionada con el proyecto AGRÓPOLIS, y con las inquietudes formuladas frente al Proyecto de Resolución "Por la cual se establecen directrices para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá", actualmente en etapa de formulación.

De manera preliminar, es necesario señalar que ninguno de los referidos riesgos que menciona al principio de su carta tiene efectos prácticos que considerar, por lo que se pasa directamente a responder una a una y de fondo, sus peticiones concretas.

### **Solicitud 1. Reconocimiento explícito de Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (PINE).**

El Ministerio precisa que la declaratoria de Proyecto de Interés Nacional y Estratégico (PINE) corresponde a un instrumento de planeación y priorización de proyectos desde la política pública sectorial y de infraestructura, y no comporta por sí misma un régimen de excepción automática frente a las determinantes ambientales ni frente al ordenamiento ambiental del territorio.

Las directrices ambientales que se formulan para la Sabana de Bogotá tienen naturaleza general, abstracta e impersonal, y se fundamentan en mandatos constitucionales y legales de protección reforzada de un territorio de especial importancia ecológica. En consecuencia, el Proyecto de Resolución no contempla cláusulas sectoriales de excepción, ni regímenes preferenciales por tipo de proyecto.

## **Solicitud 2. Reconocimiento de proyectos con procesos de concertación ambiental previos.**

Los procesos de concertación ambiental adelantados por las Corporaciones Autónomas Regionales, como el referido en la Resolución CAR No. 2984 de 2015, constituyen actos administrativos válidos y presuntamente legales, expedidos en el marco de las competencias y del contexto normativo vigente al momento de su adopción.

Ahora bien, la eventual expedición de directrices ambientales de carácter nacional no tiene como efecto la modificación, derogatoria o invalidez automática de actos administrativos particulares preexistentes, ni de instrumentos de planeación territorial adoptados conforme a la ley. Sin embargo, tales directrices sí constituyen determinantes ambientales de superior jerarquía, que deben ser observadas de manera prospectiva por las autoridades competentes, conforme al artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y sus modificaciones.

En importante aclarar que la Resolución es un acto administrativo de carácter general, expedido en ejercicio de las competencias regulatorias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuyo objeto es fijar determinantes ambientales mínimas para orientar el ordenamiento del territorio. En tal condición, no tiene la capacidad jurídica de modificar, derogar o desconocer normas de rango legal o constitucional, ni de alterar el régimen jurídico de derechos adquiridos, actos administrativos particulares o situaciones jurídicas consolidadas, válidamente constituidas con anterioridad.

De conformidad con los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y respeto por los derechos adquiridos, la aplicación de las directrices ambientales se realiza de manera prospectiva, sin efectos retroactivos, y no puede implicar la revocatoria, suspensión o pérdida automática de derechos, autorizaciones o instrumentos previamente otorgados, los cuales se presumen legales mientras no sean anulados por la autoridad judicial competente.

En consecuencia, la Resolución no opera como un mecanismo de revisión retroactiva de decisiones administrativas pasadas, sin perjuicio de que, hacia el futuro, las actuaciones de las autoridades deban armonizarse progresivamente con las determinantes ambientales allí establecidas, bajo criterios de gradualidad, proporcionalidad y razonabilidad.

## **Solicitud 3. Régimen especial para rondas hídricas.**

Las rondas hídricas son áreas de especial importancia ecológica y cuentan con protección constitucional y legal reforzada, por lo que el Proyecto de Resolución no contempla excepciones generales para su ocupación o intervención.

Cualquier obra asociada a infraestructura vial, hidráulica o de saneamiento deberá ser evaluada caso a caso, dentro de los procedimientos ambientales legalmente establecidos, y únicamente será viable si se acredita su compatibilidad con la función ecológica del área y el cumplimiento de los principios de mínima intervención y prevención del daño ambiental.

#### **Solicitud 4. Compatibilidad de usos logísticos-agroindustriales.**

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible precisa, en primer lugar, que el Proyecto de Resolución de Directrices para el Ordenamiento Ambiental de la Sabana de Bogotá no regula ni asigna usos del suelo en sentido urbanístico, ni sustituye las competencias que la Constitución y la ley han atribuido a los municipios y distritos en materia de ordenamiento territorial.

De conformidad con los artículos 311 y 313 de la Constitución Política, así como con la Ley 388 de 1997, corresponde a los concejos municipales y distritales definir los usos del suelo a través de sus instrumentos de ordenamiento territorial, en función de las realidades locales, siempre que se respeten las determinantes de superior jerarquía.

En este marco, el papel de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) no es el de autorizar o prohibir usos del suelo de manera directa, sino el de ejercer la autoridad ambiental en su jurisdicción, lo cual incluye: (i) la concertación de los asuntos exclusivamente ambientales de los planes de ordenamiento territorial, (ii) la definición, administración y protección de áreas de especial importancia ecológica, y (iii) el otorgamiento de permisos, concesiones y autorizaciones ambientales, conforme a la ley.

Así, actividades como el bodegaje agroalimentario, el almacenamiento refrigerado, la transformación primaria de productos agropecuarios, los centros de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), o la infraestructura logística asociada a zonas francas agroalimentarias, no se encuentran prohibidas de manera general por el Proyecto de Resolución, siempre que los usos definidos por la autoridad territorial competente sean compatibles con las determinantes ambientales y con la capacidad de carga de los ecosistemas presentes.

En consecuencia, la evaluación de la viabilidad ambiental de este tipo de actividades corresponde a la autoridad ambiental regional competente, en el marco de los instrumentos de gestión ambiental aplicables, y de manera armónica con los usos del suelo definidos por el respectivo municipio, sin que las directrices ambientales nacionales sustituyan o desconozcan dichas competencias.

### **Solicitud 5. Criterios ambientales diferenciados para proyectos PINE.**

El Proyecto de Resolución establece una base mínima ambiental obligatorio, aplicable a todos los proyectos en la Sabana de Bogotá, sin distinción por su naturaleza o declaratoria.

La adopción voluntaria de estándares superiores en materia de energías renovables, economía circular, gestión hídrica o restauración ecológica podrá ser valorada favorablemente en los trámites ambientales correspondientes, sin que ello implique flexibilización de las determinantes ambientales.

### **Solicitud 6. Armonización con la política de seguridad alimentaria.**

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible precisa que la definición de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional, así como la determinación de zonas de protección para la producción de alimentos, corresponde al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en su calidad de entidad rectora del sector agropecuario, de conformidad con la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional – PSAN (CONPES 113 de 2008) y las normas que la desarrollan.

En este sentido, las decisiones relacionadas con la priorización de áreas para la producción agropecuaria, el abastecimiento alimentario y la seguridad alimentaria son el resultado de una política intersectorial, liderada por el sector agricultura, y articulada a través de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional – CISAN, creada mediante el Decreto 2055 de 2009, de la cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible hace parte.

El rol de este Ministerio, en el marco de dicha política, es complementario y concurrente, y se orienta a garantizar que la producción de alimentos se desarrolle sobre una base ambientalmente sostenible, mediante la protección del suelo, el recurso hídrico, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que hacen posible la actividad agropecuaria. En particular, MinAmbiente contribuye a la seguridad alimentaria desde la gestión ambiental del territorio, sin sustituir las competencias sectoriales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

En ese contexto, las directrices ambientales propuestas para la Sabana de Bogotá no tienen por objeto definir ni delimitar zonas de protección para la producción de alimentos, ni modificar la política de seguridad alimentaria vigente, sino establecer determinantes ambientales que permitan asegurar la sostenibilidad ecológica del territorio y la conservación de los recursos naturales estratégicos que soportan la producción alimentaria presente y futura.



Así, el Proyecto de Resolución se entiende armónico y complementario con la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en la medida en que protege los suelos rurales, el ciclo del agua y los ecosistemas estratégicos de la Sabana de Bogotá, contribuyendo a la disponibilidad, estabilidad e inocuidad de los alimentos, sin sustituir las decisiones sectoriales que competen al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y a las instancias intersectoriales correspondientes.

Por último, agradecemos y reiteramos el compromiso con la transparencia, la participación y la protección ambiental de la Sabana de Bogotá como patrimonio ecológico de la Nación.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publicó una nueva versión del proyecto de acto administrativo "Por medio de la cual se establecen directrices para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá" el cual recoge el análisis de todas las observaciones realizadas durante el proceso participativo, esta nueva versión se sometió a la etapa de consulta pública de la que trata el Decreto 1081 de 2015 y se encuentra disponible para su conocimiento en el link <https://www.minambiente.gov.co/consulta/por-medio-de-la-cual-se-establecen-directrices-para-el-ordenamiento-ambiental-de-la-sabana-de-bogota/>

Cordialmente,

**JULIÁN DAVID PEÑA GÓMEZ**  
**Director de Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA.**

Aprobó: Dalila Camelo Salamanca - Contratista Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA  
Revisó: Angie Carolina Martínez Villamil -Contratista Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA.  
Fecha: 12/02/2026.